



## TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2.024)

**MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS**  
**APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 002 2022 00146 03.**

Proceso: Declarativo - Responsabilidad Civil Extracontractual.  
Demandantes: SERGIO LEÓN BETANCUR RAMÍREZ y otros.  
Demandados: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE OSOS, en lo sucesivo "COOUNISAN", y otro.  
Extracto: No se advierte desproporción en la cautela dispensada, además que la misma se aviene al ordenamiento jurídico. Confirma.

### ASUNTO A TRATAR

Se resuelve la apelación interpuesta por la codemandada COOUNISAN, contra el auto calendado el trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2.023), dimanado del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

### ANTECEDENTES

El 30 de noviembre de 2.023 en el referenciado se profirió sentencia de primera instancia, declarándose a los demandados civil y extracontractualmente responsables de los perjuicios causados con el accidente de tránsito ocurrido el 29 de noviembre de 2.021; consecuentemente se condenó al pago de las siguientes sumas:

1. Para SERGIO LEON BETANCUR RAMIREZ, como víctima directa, por perjuicios patrimoniales como lucro cesante consolidado \$4.958.422,00, mientras el futuro se cuantificó en \$108.017.589,00. Ya como perjuicios extrapatrimoniales, los morales por treinta (30) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (S.M.L.M.V.), mientras que de daño a la vida de relación veinte (20) de tales unidades.
2. Para DIANA CAROLINA PATIÑO CANO, MARIA LIBIA RAMIREZ DE BETANCUR y GABRIEL GUSTAVO BETANCUR BARRIOS, se les reconoció como Perjuicios Morales de a diez (10), quince (15), y quince (15) S.M.L.M.V., respectivamente.

En cuando a costas -agencias en derecho-, en favor de la parte demandante, se dispuso \$14'140.000.00 (ver archivo 129).

Esa decisión fue apelada por ambas partes, habiendo sido admitida por esta Corporación en auto del 19 de diciembre pasado (archivo 149).

Con base en la sentencia de primera instancia, la actora deprecó: 1) la inscripción de la demanda sobre el bien identificado con Matrícula Inmobiliaria (M.I.) 025-19037; y, 2) ordenar que los dineros derivados la ejecución del contrato de transporte entre COOUNISAN y el municipio de SANTA ROSA DE OSOS, sean consignados a órdenes del Despacho judicial (archivo 133).

En el auto atacado se decretó el registro de la demanda sobre el inmueble con M.I. 025-19037; pero en cuanto al segundo ítem se consideró que se busca “*embargar los dineros de esa convención*”, lo que no se ajusta al literal c) del numera 1° del artículo 590 procesal civil; por ende, se negó lo mismo, agregando que otrora esta Corporación, revocó el embargo decretado sobre los ingresos operaciones de COOUNISAN (archivo 134).

Frente a esa decisión la parte actora solicitó “*aclaración y corrección*” (archivo 144); mientras que COOUNISAN presentó los recursos de

reposición y en subsidio apelación, sosteniendo que en este proceso ya existen cautelas que garantizan el pago de la condena<sup>1</sup>, por lo que la inscripción decretada es innecesaria y desproporcionada, aunado que se le perjudica, siendo esta nueva medida un abuso del derecho, por ende, solicitó revocarla (archivo 145).

En providencia del 24 de enero de 2.024 se negó la aclaración y corrección (archivo 146); y el 12 de febrero hogaño (archivo 150), se decidió no reponer, en tanto que la cautela decretada procede en este asunto declarativo frente a bienes sujetos a registro y que sean propiedad del demandado, tal como lo señala el numeral 1° literal b) del artículo 590 del C. G. del P., máxime definiendo la instancia condenó al pago de perjuicios provenientes de la responsabilidad civil extracontractual, decisión que si bien no está ejecutoriada, pues ambas partes apelaron, evidencia la procedencia de la medida.

Sobre la desproporción, que la misma no se advierte, por cuanto la inscripción de la demanda está para hacer pública la existencia del proceso, sin que limite la propiedad o las transacciones que con relación a dineros o bienes se pueden realizar, punto explicado cuando se decretaron cautelas (archivo 89), de ahí que no hubo desestabilización patrimonial, pues los recursos económicos de COOUNISAN no se restringieron.

Respecto a la viabilidad y necesidad, sostuvo que lo querido con la cautela decretada el 13 de diciembre de 2.023, es asegurar el

---

<sup>1</sup> Explicó que: “Es importante indicar que, mediante auto fechado de día 14 de marzo de 2023, el Despacho ya había decretado medida cautelar de inscripción de demanda, particularmente, sobre (i) todos los contratos de vinculación o afiliación que tiene suscritos la Cooperativa Multiactiva de Transporte Unido de Santa Rosa de Osos “COOUNISAN”, con cada uno de los propietarios de vehículos que se encuentran afiliados a la empresa de transporte; y (ii) en el libro en que se lleve el registro del capital Social Cooperativo de la Cooperativa Multiactiva de Transporte Unido de Santa Rosa de Osos “COOUNISAN”, así como en los libros en donde se haga registro o seguimiento de los aportes sociales individuales de los socios cooperativos, para que se indique que tales recursos quedarán afectos al resultado del proceso de la referencia.”.

cumplimiento de la decisión judicial condenatoria por, entre otros, la hoy recurrente; y, en cuanto a la apariencia de buen derecho, es un presupuesto solo exigido para las medidas innominadas, es decir, las consagradas en el literal c) del artículo 590 procesal civil, mas no para aquellas propias y nominadas en los procesos declarativos.

Subsidiariamente concedió la alzada, la que se resuelve, previas:

### CONSIDERACIONES

El auto que resuelve sobre una cautela es apelable según lo normado por el artículo 321.8 del C. G. del P., por lo que seguimos el estudio del asunto en los términos de los artículos 326 y 328 ibídem, considerando que el recurso de apelación busca que el Superior funcional estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis.

Las medidas cautelares tienen como fin asegurar, conservar o anticipar la efectividad de los derechos que puedan llegar a reconocerse con una resolución judicial<sup>2</sup>, limitándonos a la medida dispuesta en la decisión atacada consistente en la inscripción de la demanda en el inmueble propiedad de “COOUNISAN”, con matrícula 025-19037.

Tratándose de un asunto declarativo, dicha cautela es procedente y su viabilidad está dispuesta en el literal b) del numeral 1° del artículo 590

---

<sup>2</sup> La Corte Constitucional ha dicho que las medidas cautelares garantizan “... el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado”. (Sentencia T 172 de 2016).

del C. G. del P., el que precisa que la inscripción de la demanda puede decretarse sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando, como en este caso, “... *se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.*”.

Tal cautela tiene como fin asegurar los resultados de la decisión judicial, la que en este caso y en primera instancia estimó las pretensiones derivadas de responsabilidad civil extracontractual, sin que la norma exija agotar la segunda instancia para su procedencia.

Si bien en este asunto por auto del 14 de marzo de 2.023 hubo decreto de cautela (archivo 89), ello no es incompatible con la medida criticada por la recurrente, pues también se trató del registro de la demanda, lo cual procede en estos eventos declarativos, aunado que la inscripción dispuesta no pone los bienes fuera del comercio, ni impide su negociación.

Es decir, con lo decretado se publicita una situación, sin que se pongan los bienes fuera del comercio (artículo 591 procesal civil); además que no se trata de un “*abuso*”, pues la titular del derecho de dominio cuenta con mecanismos para impedir la práctica de la medida, tal como es prestando caución o solicitando una sustituta conforme con el inciso 3° del literal b) numeral 1° del artículo 590 de. C. G. de. P.; cauciones que pueden ser cumplidas de múltiples formas, según indica el inciso 1° del artículo 603 del mismo ordenamiento.

Ahora, censura el recurrente la medida como desproporcionada, pero sin presentar argumentos que cuantifiquen lo pertinente como para hacer un análisis analógico del artículo 600 del C. G. del P. (dejando en claro que no estamos frente a embargo alguno), de donde se insiste,

que el interesado cuenta con mecanismos para impedir o levantar este tipo de anotaciones, tal como se indicó en el párrafo anterior.

En tales términos, dada la procedencia de la medida, sin que advierta abuso del derecho, desproporcionalidad, y sí la correspondiente necesidad, hace que la providencia objeto de alzada sea confirmada.

Sin costas en la medida que no se comprobó su causación, tal como lo prevé el artículo 365.8 del C. G. del P..

Por lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín;

#### RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto calendado el trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2.023), dimanado del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, según se motivó.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, vuelva el expediente de la apelación de auto al Despacho de origen. Sin costas.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
MAGISTRADO